

Galicia: Territorio, conflicto y discurso rural ante los incendios

Celtia Traviesas

■ El pasado 15 de octubre, una multiplicidad de incendios atravesó el noroeste peninsular, de Coimbra a Asturias, asolando Galicia. El fuego se llevó por delante cuatro vidas y más de 49.000 hectáreas de monte gallego (unas 14.000 hectáreas más de las que estimó la Xunta en un primer momento; cifra que se vio obligada a corregir tras las voces de protesta). El aire se volvió irrespirable y el cielo parecía presagiar un Apocalipsis. La cantidad de terreno que ardió aquel fin de semana en Galicia es casi el cuádruple del que ardió el resto del año, unas 12.600 hectáreas. Pero la excepcionalidad de los incendios del 15 de octubre no apunta solo a la dimensión de los mismos, sino al hecho novedoso de ver cómo el fuego llegaba al mismo centro de Vigo y era apagado por vecinas y vecinos que salieron a las calles con cubos de agua y extintores ante el silencio y la desinformación de los poderes públicos.

Pero, ¿por qué ardió Galicia? No es fácil sintetizar la respuesta. Por un lado, es necesario entender que se trata de un problema social y medioambiental que exige para su solución una visión holística en el presente y también una mirada hacia el pasado, hacia la *tradicional* cultura del fuego y al uso del fuego como arma de protesta, para poder construir futuro.

Los intereses sobre el suelo, la sequía, los efectos devastadores del cambio climático, la presión urbanística, la despoblación del mundo rural, el monocultivo de especies pirófitas como el eucalipto y el pino, la falta de ordenación territorial, la corrupción institucional en las políticas de prevención y extinción..., representan subproblemas que se deben atajar de manera específica y coordinada. Pero eso no es todo y no basta como respuesta.

Los incendios son un ejemplo de lo que Rittel y Webber calificaron en 1974 como *wicked problems* 1/, es decir, problemas perversos o retorcidos. Ambos autores establecieron una conceptualización ya clásica en la planificación pública y que parte de una evidencia muy sencilla y popular: los problemas colectivos son siempre síntomas de otros problemas. Por eso no podemos dejar en manos de técnicos y planificadores la identificación, diagnosis e implantación de políticas. “La información que se requiere para entender un wicked problem depende

de la idea que uno tenga de cómo solucionarlo”, escribieron Rittel y Webber. A partir de aquí, es fácil extraer la conclusión de que no se

1/ Rittel, H.W. & Webber, M.M. (1973): “Dilemmas in a general theory of planning”. *Policy Sciences*, 4 (2), 155-169.

6. AQUÍ Y AHORA

puede formular un problema de planificación pública como el de los incendios sin que este nos remita a una determinada visión del mundo.

El monte tuvo históricamente en Galicia una triple función: social, ecológica y productiva. Era un soporte fundamental del sistema agrario: proporcionaba madera para los aperos y leña para calentar las casas, piedras para las construcciones y alimentos básicos como las castañas. El monte servía de pasto para el ganado, ampliaba el terreno de cultivo de cereal a través del sistema de rozas y suministraba materia prima para la elaboración de un fertilizante orgánico esencial para mantener el rendimiento de las tierras de trabajo y que requería una gran cantidad de esa planta identitaria, de vistosas flores amarillas y molestos pinchos, que aquí llamamos toxo.

El monte era –y es– un común (aún hoy, los montes vecinales en mano común ocupan más del 23% de superficie total de Galicia). Es decir, su uso, su gestión y su propiedad correspondían a la comunidad campesina. El fuego no era un elemento extraño a él, de hecho formaba parte del manejo agrosilvopastoral normal. Como ha explicado en varias ocasiones la historiadora agraria Ana Cabana 2/, “la conversión de los restos vegetales en ceniza para poder abonar el terreno para la realización de rozas o la quema de matorral para regenerar el pasto son usos tradicionales que se conocen desde el Neolítico y que no fueron abandonados por completo hasta que las innovaciones tecnológicas, que conformaron la conocida como revolución verde (mecanización, abonado químico, etc.), se generalizaron en la segunda mitad del siglo XX”. Fue con la llegada de esta tardía industrialización de la economía gallega con la que el *lume no monte* (fuego en el monte) pasó a denominarse *incendio forestal*, y con la que se rompió la tradicional simbiosis monte-agricultura.

Esto no es algo exclusivo de Galicia, claro. El contenido simbólico de los incendios forestales se ha constatado en muchas comunidades campesinas alrededor del mundo, primero como la simple continuación de unas prácticas tradicionales en un marco político y económico que no las permitía (y que denominaba *incendio* a las quemas, para criminalizarlas) y más tarde como modo de protesta ante legislaciones que rompían las fórmulas tradicionales de uso del monte. Se trata de un conflicto entre dos *modos de uso*: el campesino, de base orgánica y que entendía que el mercado debe adaptarse a los recursos –no al revés–, y el modo de uso propio de la sociedad industrial, que impuso el aprovechamiento exclusivamente forestal.

En Galicia, la imposición de este modo de uso industrial fue, como ya se ha señalado, muy tardía, y se centró en el manejo forestal de los montes comunales.

2/ Cabana, A.: “A cultura do lume e os montes galegos: aproximación a unha relación histórica”. *Recursos Rurais*: revista oficial do Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (IBADER), ISSN-e 1885-5547, n.º. 5, 2009, págs. 101-106. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3173501>

El fuego en el monte constituyó una forma de protesta clara y muy notoria a partir de los años 60 del siglo XX; primero como reacción ante las repoblaciones masivas y, posteriormente, debido al conflicto desatado en el proceso de devolución de la titularidad y gestión de los montes comunales, ya puramente forestales.

Este conflicto sobre los comunales se había iniciado en el siglo XIX, con la etapa liberal que arrasó el mismo concepto de *propiedad comunal* y se intensificó en los años 40 del siglo XX, cuando la Ley Hipotecaria de 1941 otorgó la titularidad de los montes vecinales a los ayuntamientos.

La tragedia del “oro verde”

Diluido el conflicto en el transcurrir de los años, Galicia se convirtió en una de las áreas forestales más importantes de Europa, con una superficie total arbolada de más de 1.400.000 hectáreas (la mitad de las cuales pertenece a monte comunal), lo que representa el 48% del territorio gallego. Contenemos el 50% de las cortas de madera del Estado español y el 45% de sus incendios. Alrededor de un 3,5% de nuestro PIB corresponde al sector forestal. Ostentamos el más que cuestionable orgullo de ser una de las principales áreas de producción de eucalipto blanco del mundo y poseemos municipios enteros, como por ejemplo Trabada (en

Lugo), donde el 45% de la población trabaja directamente en la industria ligada a esta especie.

“La actual expansión mundial del monocultivo de eucalipto no es algo que haya ocurrido casualmente”

Gracias al eucalipto (y, en menor medida, al pino), en Galicia tenemos una economía propia del sur global, basada en plantaciones madereras de una sola especie que incluye preparación intensiva del suelo, uso de agro-tóxicos y cosechas mecanizadas

en rotaciones cortas. Es un modelo que impone un modo de uso del monte fundamentado en la explotación intensiva de los recursos naturales y en un sistema económico, el capitalista, al borde del colapso. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) ha denunciado en reiteradas ocasiones las plantaciones de eucalipto en América Latina, que incluyen el desarrollo de un nuevo negocio: el de la producción de etanol celulósico como agrocombustible a partir de la manipulación genética.

La actual expansión mundial del monocultivo de eucalipto no es algo que haya ocurrido casualmente. Por el contrario, es el resultado de accionar un conjunto de actores que se plantearon promoverla bajo el disfraz de la “plantación de bosques”, con la FAO como principal ideóloga. La Convención sobre Cambio Climático de Naciones Unidas fue

6. AQUÍ Y AHORA

otro actor importante en la promoción de la forestación a gran escala en el sur global al invitar a los países industrializados a “compensar” sus emisiones de dióxido de carbono mediante el establecimiento de plantaciones forestales en países no industrializados. Una lógica –la de los pagos por servicios ambientales– que no tiene en cuenta ningún criterio de justicia social o redistribución de la riqueza y que está totalmente subordinada a la ideología neoliberal.

El “oro verde” le llama al eucalipto mucha gente en los pueblos gallegos porque, como suelen decir, “puede llegar a ser el plan de pensiones de una persona”. La principal diferencia con las plantaciones de eucalipto del sur global es la estructura de la propiedad. En Galicia hay entre 500.000 y 600.000 personas que son propietarias privadas de monte, según estima la asociación que las agrupa, Promagal. Plantan eucalipto en un mundo rural que, probablemente, ya no habitan porque es una especie de crecimiento rápido; en 15-17 años ya se puede talar y vender para pasta de papel. Y esa inmediatez económica es algo contra lo que los árboles autóctonos como el castaño o el roble no pueden competir. Aunque la incertidumbre sobre los precios, la falta de seguridad y, sobre todo, la situación de cierto *monopolio* que ejerce la papelera Ence (principal industria compradora del eucalipto gallego), ya no prometan tanto oro. De hecho, los productores de eucalipto gallegos (en su mayoría pequeños propietarios) han llegado a hacer varias huelgas de tala contra la bajada de precios acordada por las papeleras.

El eucalipto ha estado en el foco de atención de los incendios desde hace muchos años porque es una especie pirófito, altamente combustible, gran consumidora de agua. Lo saben bien en Portugal (que, junto con Galicia, conforma la otra región europea con grandes extensiones de eucalipto). Por eso, en marzo de este año aprobaron un plan forestal que incluye una moratoria al eucalipto y que pretende detener su expansión de cara a 2030. Una medida que sirvió al Gobierno portugués como escudo ante las críticas por las tragedias que el fuego causó en meses posteriores, aunque no pudo evitar la dimisión de la ministra de Interior.

Sin embargo, es justo señalar que un monte de eucaliptos cuidado, es decir, limpio de maleza, vigilado por la comunidad y ordenado (árboles alineados, en distintas fases de crecimiento, separados regularmente por prados o explotaciones agroganaderas y surcados por pistas bien conservadas) no arde tan fácilmente. Buena muestra de ello es Trabada, que apenas conoce los incendios pese a ser, probablemente, el municipio europeo donde hay más eucaliptos por km².

Pero también es justo aclarar que donde hay monocultivo de eucalipto hay un monte muerto y un medio rural despoblado, o despoblándose. El eucalipto es pan para hoy y hambre para mañana. Hasta en Trabada saben bien que no hay relevo generacional posible ni comunidad que vigile el monte en pocos años. El eucalipto ha ido robando terreno

no solo al monte autóctono y multifuncional, sino también a las agras, prados, eidos y cortiñas, desestructurando el paisaje agrario, condenando al mundo rural a dejar de producir alimentos y, en ese camino, condenando también al mundo urbano. Esa es la verdadera tragedia que nos trajo el eucalipto.

Para hacernos una idea de la magnitud de esta tragedia, un dato: la expansión del eucalipto en Galicia supera en un 76% las previsiones que la Xunta tenía en 1992. En esa fecha se aprobó un plan forestal con una vigencia de cuarenta años (hoy existe ya un nuevo plan forestal que espera ser aprobado antes de final de 2017). Lejos de fijar límites a las plantaciones de eucalipto, aquel documento buscaba potenciar la producción maderera. Fue aprobado con el consenso de todos los grupos políticos, y en él se estimaba que el eucalipto ocuparía una superficie de 245.000 hectáreas. Una cifra que ya fue superada hace veinte años y que hoy se sitúa un 76% por encima. Según el brigadista forestal y miembro de la asociación ecologista Adegas, Xosé Manuel Rodríguez, ya hay más eucaliptos en Galicia –unos 80 millones de unidades– que en Australia, el país del que se cree que llegaron en torno al año 1867.

Tuvo que llegar el fuego a la ciudad

“Me la voy a jugar: no vamos a encontrar trama organizada, ni siquiera terroristas medioambientales (cinco, quizá diez focos malintencionados). La culpa de lo que ha pasado es un poco de todos los que miramos para otra parte con el mundo rural. Tuvo que llegar el fuego a la ciudad. No podemos permitirnoslo más, menos aún con el calentamiento global”. Estas líneas fueron escritas en las redes sociales días después de los incendios del 15 de octubre por Carlos Losada, un coruñés que supo resumir de manera clara y sencilla tres cuestiones clave en los pasados incendios: la manipulación mediática ejercida por el gobierno, el problema de un medio rural despoblado y la amenaza del cambio climático en una Galicia donde la lluvia es arte cada vez con menor frecuencia.

El actual gobierno del PP jugó mediáticamente la idea de los “terroristas incendiarios”, que por una parte remite al subconsciente gallego debido a la historia del uso del fuego como arma de protesta en el monte y, por otro, añade esa connotación actual de miedo que ha propagado el terrorismo yihadista. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijoo, y la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, repetían aquellos días un eslogan con mucho gancho: “El monte no arde, lo queman”. Pero, ¿quién lo quema? La teoría de los *terroristas incendiarios* también fue usada en 2006 por el gobierno bipartito, al considerar los incendios un “ataque indiscriminado, masivo y terrorista” contra las políticas del BNG, pero no hizo de ello el eje central de su discurso, como sí ha hecho el PP ahora.

La Xunta de Galicia gastó 77.000 euros en publicar la declaración de Feijoo sobre los incendios del 15 de octubre a página completa en los pe-

6. AQUÍ Y AHORA

riódicos, a pesar de que la Fiscalía desmintió la versión gubernamental. En un guiño cómico de esos que regala a veces la realidad, resultó que los únicos *terroristas incendiarios* detenidos fueron una mujer de 74 años que hizo una hoguera con maleza en su finca, en Mos, y un vecino de Vigo que imprudentemente asaba unos chorizos en el municipio de Xinzo da Limia. Desde hace tiempo, el discurso del terrorismo o de la trama incendiaria en Galicia es más una coartada para tapar fallos en la gestión y las verdaderas y complejas causas de los incendios que una realidad.

Días después de la publicidad institucional, saltaba la noticia de que el máximo responsable en la lucha contra los incendios en Galicia estaba siendo investigado por la adjudicación irregular del servicio de helicópteros en la extinción de incendios en varias campañas. La llamada industria del fuego, que hace referencia al dispositivo de prevención y extinción de incendios, es una actividad que, en ocasiones, genera más dinero que el propio monte y es en ella donde existe una verdadera trama corrupta que condena a la precariedad laboral a mucha gente, que enriquece a unos pocos y que configura uno de los subproblemas más importantes en relación a los incendios forestales.

Las investigadoras e investigadores del lucense Laboratorio do Territorio **3/** –adscrito a la Universidad de Santiago de Compostela– suelen incidir en que los incendios forestales son “la fiebre de un territorio enfermo” y que pueden ser interpretados, además, como consecuencia de un déficit democrático, pues existe en Galicia un marco normativo aprobado en el Parlamento que, de aplicarse, reduciría significativamente la situación de riesgo.

“... los incendios forestales son 'la fiebre de un territorio enfermo'”

Uno de los grandes problemas políticos de Galicia es la ausencia de ordenación territorial. Ordenar el territorio quiere decir, en palabras de Manuel Gallego Jorreto **4/**, “hacer un lugar de vida y una sociedad en lo posible más estructurada y articulada”. Muchos de los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad tienen su origen en la ausencia de unas políticas sensatas y coherentes de ordenación del territorio. Así, nos encontramos con el exceso de forestación, la pérdida de superficie agraria útil, el cierre de las granjas de leche (cuyo problema reiterado es “de base territorial”), el despoblamiento en el interior, la presión urbanizadora en la costa, los problemas de abandono del medio rural, los incendios, la pérdida de patrimonio natural, la degradación medioambiental, la urbanización difusa, la desarticulación social, la emigración, etc.

La Administración pública gallega ha pensado siempre a corto plazo, y casi siempre lo ha hecho

3/ <http://laborate.usc.es>

4/ <http://www.observatoriogalegodoterritorio.org/gall/>

con criterios electoralistas locales y bajo la premisa global de la *ideología del crecimiento*. No está interesada en dar a conocer lo que supone para nuestras vidas la gestión del territorio y las iniquidades sociales que de ella se pueden derivar. Es urgente innovar en los modelos de gobernanza de la tierra, de las tierras en su dimensión física, productiva y cultural, de derecho de las personas, y de los territorios en el sentido de espacios geográficos sobre los que una sociedad se reproduce y ejerce su dominio. Necesitamos valentía política para reflexionar como sociedad sobre el territorio, su uso y su propiedad.

En este sentido, nuestros montes, y especialmente los montes comunales, son una oportunidad única para mantener con vida el medio rural, por eso sería tan importante reconocerlos en la Constitución como una nueva forma de propiedad ni pública ni privada e impulsar en ellos una gestión forestal alternativa, donde los intereses de la protección del medio ambiente y de la creación de empleo y de bienestar se encontrasen. Pero no ya en el marco de unas políticas europeas del llamado “desarrollo rural”. Estamos en una etapa posindustrial en la que necesitamos desaprender lo aprendido estos últimos años y volver a pensar el futuro. La palabra *desarrollo* no es hoy la herramienta más adecuada para hablar del mundo rural. La hemos descartado para muchas cosas, nos queda descartarla para esta.

Incendios, despoblamiento y un nuevo discurso rural

Incendios y despoblamiento rural están íntimamente relacionados tanto por la desaparición del paisaje agrario como por la evidencia de que, sin gente, el monte ya no tiene quien lo habite y quien lo cuide. Una producción intensiva de pino o de eucalipto en un desierto humano quizás se pueda llamar desarrollo, pero desde luego no mundo rural.

El problema de los discursos rurales que se elaboran, incluso desde la izquierda, es que no suelen abordar cuestiones políticas clave para el mundo rural de hoy. Siguen hablando de políticas de desarrollo, de dotación de servicios, de subvenciones e infraestructuras. Los planes Leader, por ejemplo, que surgieron en los años 90 del siglo pasado para paliar el proceso de deterioro económico y social de las áreas rurales desfavorecidas –mediante una perspectiva territorial, de desarrollo endógeno y enfoque participativo *botton up*–, no funcionaron. En gran parte porque el capital social es indispensable para que exista participación real. Y en las sociedades que están muy deterioradas, como las sociedades rurales envejecidas, hay que ir un paso más allá.

El desarrollo rural se ha traducido con frecuencia en un intento de trasladar el modo de vida urbano al mundo rural. Y ha fracasado en ello. El objetivo debería ser el contrario: la recuperación, la valorización y la potenciación de ese otro modo de entender la vida del mundo rural para trasladarlo al mundo urbano. Frente a quien desde el liberalismo sostiene –y no sin criterio– que las estructuras económicas del

6. AQUÍ Y AHORA

mundo rural y su población son hoy en día incompatibles con el concepto de ciudadanía igual en derechos y determinados objetivos, debemos contraponer el mundo rural como un espacio inspirador de realidades alternativas al sistema capitalista. Donde la cooperación, la autogestión y lo común son protagonistas. Y tejer lazos entre el campo y la ciudad para reconstruir nuestra soberanía alimentaria. Ese debería ser el enfoque de un discurso rural para el siglo XXI.

En la época de colapso del sistema industrial urge rescatar la identidad rural y sus valores de compromiso hacia la comunidad frente a la imposición neoliberal del individualismo. El auténtico lenguaje de la izquierda, decía Tanwaney, no son los derechos sino las obligaciones. “Lo que nos compromete con la emancipación son las responsabilidades compartidas que estamos dispuestos a asumir colectivamente”.

“En la época de colapso del sistema industrial urge rescatar la identidad rural y sus valores”

Necesitamos recuperar aprendizajes preindustriales que perviven en el mundo rural y que tienen mucho que ver con la defensa de la tierra y de los recursos naturales. Esta es también la clave para luchar contra el cambio climático, que cada vez nos traerá mayores incendios, más dañinos, más frecuentes. El fatídico *factor 30* (más de 30 °C,

vientos de más de 30 km/h y humedad de menos del 30%), que estuvo implicado en los incendios del 15 de octubre junto a la continuada ausencia de lluvia, será algo habitual en Galicia y en todo el sur de Europa a partir de ahora.

Los últimos incendios deben ser vistos irremediablemente como consecuencia del cambio climático, y este como consecuencia de un sistema económico determinado. Hasta que no seamos capaces de detener las imposiciones del mercado, no habrá forma de paliar el deterioro medioambiental del planeta. Lo dijo la hondureña Berta Cáceres: “Mientras tengamos capitalismo este planeta no se va a salvar, porque el capitalismo es contrario a la vida, a la ecología, al ser humano, a las mujeres”.

Es preciso un cambio profundo en nuestro sistema productivo. Una transición energética: sí. Pero también necesitamos cambios en el sistema agroalimentario mundial (responsable de más del 30% de las emisiones de gases con efecto invernadero) y cambios en nuestra forma de vivir y de relacionarnos. Precisamente, la economía de los cuidados que reclama el feminismo tiene que ver con esta nueva forma de producir, de entendernos, de establecer las reglas que rigen nuestras sociedades. Son las mujeres –como afirma Silvia Federici– quienes desde muchos puntos del planeta más nos hemos resistido siempre a las imposiciones

GALICIA: TERRITORIO, CONFLICTO Y DISCURSO RURAL ANTE LOS INCENDIOS

de la sociedad para el mercado, salvaguardando los bienes comunes, protegiendo formas de gestión, producción y relación social precapitalistas, solidarias y respetuosas con el medio ambiente y las personas.

Es esta la determinada visión del mundo que necesitamos contraponer a los incendios del pasado 15 de octubre. Galicia, país de labregos, país de minifundio y agricultura familiar, es hoy un territorio desestructurado donde lo rural ocupa alrededor del 80% de la superficie, pero solo es habitado por el 20% de la población. Hace poco más de cincuenta años, sin embargo, casi tres cuartas partes de las gallegas y los gallegos vivíamos y trabajábamos en el campo. Por eso, porque hace tan poco tiempo, Galicia sigue teniendo su alma en el mundo rural. Y esa no es nuestra debilidad, ni la de ningún pueblo, sino nuestra fortaleza inspiradora y revolucionaria.

Los incendios forestales son la fiebre de un territorio enfermo. Y la salud del territorio es una cuestión que atañe a la población en su conjunto. Desde el nivel individual al colectivo, y que tiene que ver con nuestras aspiraciones sociales, con qué tipo de mundo queremos y con cómo queremos vivir en él.

Celtia Traviesas es ingeniera agrícola y periodista